

EN ESTE NÚMERO | *IN THIS ISSUE*

¿Transformación digital + IA > ciberataques?

Digital transformation + AI > cyberattacks?

Complementario de trabajo de riesgo modifican aspectos de normas técnicas del seguro

Modification of the technical standards of the complementary occupational risk insurance

Oportunidades en épocas de crisis para el private equity o capital riesgo

Opportunities for private equity or risk capital in times of crisis

Comentarios a los recientes precedentes vinculantes en materia previsional

Comments on the current binding precedents in social security matters



COMENTARIO TRIBUTARIO

Deducibilidad de pagos por indemnizaciones o penalidades y recientes pronunciamientos jurisprudenciales

5 CÉSAR ANGULO GAUTHIER
Asociado senior, especialista en derecho tributario y Fintech



¿Transformación digital + IA > ciberataques?

7 CAMILA MALLQUI ESCALANTE
Asociada, especialista en competencia, barreras burocráticas y antidumping



ALERTA MÁXIMA

10 Modifican aspectos de normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo



El periodo de adecuación ambiental en actividades industriales manufactureras y de comercio interno

12 CECILIA TORRE SANDOVAL
Asociada senior, especialista en derecho ambiental



Los convenios de administración de bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio cultural

15 ANDRÉS DEVOTO YKEHO
Asociado, especialista en regulación municipal y autorizaciones



DESDE EL CONGRESO

- * Fondo de compensación para pescadores artesanales afectados por oleajes anómalos.
- * Reforma de pensiones por parte del Ejecutivo.

20



COMENTARIO LABORAL

Comentarios a los recientes precedentes vinculantes en materia previsional

22 SANDRA RODRÍGUEZ CHÁVEZ
Asociada, especialista en derecho laboral y previsional



Oportunidades en épocas de crisis para el private equity o capital riesgo

24 ALEJANDRA SANTISTEVAN DE LAS CASAS
Asociada senior, especialista de derecho corporativo



Actividades institucionales

27



COLUMNAS
- REVISTA LEGAL -
NÚMERO 213

ESTUDIO **MUÑIZ**
MUÑIZ OLAYA MELÉNDEZ CASTRO ONO & HERRERA Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Alexandra Ojeda

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
N° 2007-07703

OPENSAC editor.open@gmail.com
IDEAS & SOLUCIONES T- (51) 936 645 459

SUMARÍSIMO¹

"A veces uno sabe de qué lado estar, viendo simplemente quienes están del otro lado."

Leonard Cohen

En su sesión del jueves 7 de septiembre, el Pleno del Congreso de la República (PCR) decidió aprobar la "moción de orden del día 7565", propuesta por la congresista de la agrupación política Avanza País Patricia Chirinos, mediante la cual se busca remover a la totalidad de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). De esta forma, el PCR aprobó y acordó en la moción que, en un plazo de 14 días hábiles, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos (CJ) que preside la congresista Janet Rivas, (integrante del movimiento político - Perú Libre- que aupó al vacado expresidente de la república Pedro Castillo en tal cargo) se encargue de realizar una "...investigación sumaria a los miembros de la JNJ por causa grave...".

La Constitución Política del Perú (CPP), en su artículo 157, establece "...que los miembros de la JNJ pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso de la Republica (CR) adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros...". Nada indica sobre si tal remoción puede ser, como se pretende en este caso, de forma conjunta o colectiva, ni nada expresamente sobre lo que debe entenderse sobre la gravedad de la causa.

Quizás dos antecedentes de reciente data puedan dar, objetivamente, a los miembros de la CJ alguna pista sobre lo que deberían entender respecto de la envergadura o características de la falta grave imputada². Y no asimilar como tal, por ejemplo, algunas de las causales en las que se funda la moción presentada por la congresista Chirinos; entre estas: i) el que uno de los integrantes esté ejerciendo el cargo, "pese" a haber cumplido 75 años (edad límite para ser elegido en el cargo, pero no para desempeñarlo, exactamente igual a lo que en varias oportunidades ocurrió con exmagistrados del Tribunal Constitucional); ii) haber efectuado un pronunciamiento público mediante el cual solicitaban mayor reflexión de parte del CR en el juicio político llevado a cabo contra la fiscal de la nación Zoraida Avalos (que terminó con su destitución) y iii) no haber presentado informes anuales ante el pleno del CR.



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ

Socio principal - editor

Resulta inexplicable, eso sí, que el muy desprestigiado CR haya, primero aprobado y segundo, decidido abrir una investigación o proceso sumario (para los legos en litigio, un proceso muy breve, pensado para tramitar causas en donde los hechos están casi determinados por su flagrancia o contundencia de las pruebas existentes) cuando no existen en el presente caso indicios (mucho menos pruebas) suficientes que puedan dar lugar al inicio de un proceso de estas características. Todo parece indicar, entonces, que este más que un proceso legítimo en el que las causales nada de grave tienen, es estrictamente político; vale decir, detrás del proceso o investigación iniciada no hay un verdadero ánimo de sancionar ninguna falta grave cometida por el conjunto de los integrantes de la JNJ, sino el solo prurito de removerlos porque no son afines o cómodos para la estrategia o finalidad que los integrantes de las agrupaciones políticas que hoy gobiernan el CR tienen pensado implementar en el muy corto plazo.

Finalmente, es paradójico y también penoso que el destino de los miembros de la JNJ, en el curso de un proceso cuya imputación es la supuesta falta grave, vaya a estar en manos de congresistas absolutamente deslegitimados para llevar a cabo un proceso de tales características. Allí está el ejemplo de la presidente de la CJ, Janet Rivas, que se abstuvo de votar en el escandaloso caso del excongresista Freddy Diaz (hoy preso por el delito de violación sexual perpetrado contra una trabajadora del CR dentro del propio recinto congresal).

O de las congresistas María Acuña Peralta, Rosio Torres y Heidi Juárez, denunciadas por trabajadores del CR por un injustificado e ilegal recorte de sus remuneraciones salariales. Y para cerrar, el del congresista Elvis Vergara, a quienes tirios y troyanos acusan de haber formado parte del grupo congresal que habría medrado bajo la sombra del expresidente Castillo, denominada "Los niños". Estos son los "jueces" que llevarán a cabo el proceso sumario por falta grave, ni más ni menos.

Algo si es absolutamente seguro, nada bueno para el país saldrá de esa comisión.))

¹ adj. Der. Dicho de un juicio: De un tipo que, siendo civil o criminal, tiene una tramitación brevísima, sea por la urgencia o la sencillez del caso litigioso, o por la gravedad o flagrancia del hecho criminal.

² destitución del exconsejero Efraín Anaya Cárdenas (2010) y destitución de los 7 exconsejeros del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, por el hoy famoso caso, ese si grave, "cuellos blancos del puerto".

SUMMARY¹

"Sometimes you know which side to be, just seeing who is on the other side."

Leonard Cohen

In its session on Thursday, September 7, the Plenary Assembly of the Congress of the Republic (PCR) approved the "point of order of the day No. 7565", posed by Patricia Chirinos, Congresswoman for Avanza País political party, which purpose is to remove all the members of the National Board of Justice (JNJ). Thus, the PCR approved the point of order and agreed that within 14 business days, the Commission of Justice and Human Rights (CJ) presided by Congresswoman Janet Rivas, (member of political party Perú Libre, which put former President of the Republic, Pedro Castillo, in office) would be in charge of conducting a "...summary investigation of JNJ members on gross misconduct...".

Section 157 of the Political Constitution of Peru (CPP) sets forth that "... JNJ members may be removed on gross misconduct by agreement of the Congress of the Republic (CR) adopted with the affirmative vote of two-thirds of the majority vote...". Neither does it indicate if such removal may be made in an individual or collective manner, as intended in this case, nor does it expressly state what should be understood regarding the severity of the cause.

Maybe two recent precedents may give the Commission of Justice some objective clues on what is to be understood regarding the scale or characteristics of the attributed gross misconduct² instead of assuming as gross misconduct some of the grounds supporting the point of order submitted by Congresswoman Chirinos; such as: i) one of the members holds office "despite" having turned 75 (this is the age limit to be elected for the position, but not to hold it, as has been the case of former Magistrates of the Constitutional Court in many occasions); ii) making a public statement whereby they requested further consideration from the Congress on the impeachment of Attorney General Zoraida Avalos (who was later removed) and iii) failure to submit annual reports before the Plenary Assembly of the Congress.

It is unfathomable, indeed, that the tarnished Congress has, in the first place, approved, and, secondly, decided to open an investigation or summary proceeding (for those who are not experts in litigation, this a very brief proceeding, designed to process cases where facts are almost determined because they are flagrant of due to the existence of sound evidence) if there are not enough indications (much less proof) in this case to result in starting a proceeding of this nature. Hence, everything seems to suggest that this is not a legitimate proceeding but strictly political since the grounds are not serious at all. That is to say, behind the proceedings or the investigation started there is no real intention to punish a gross misconduct committed by the whole of the members of the JNJ, but the mere obsession of removing them because they do not agree or are not useful to the strategy or ends of the political parties that currently rule the Congress, which they intend to implement in a very short term.

Finally, it is both ironic and shameful that the fate of the JNJ members, over the course of a proceeding where indictment is a supposedly serious fault, will be at the hands of congressmen too severely delegitimized to conduct a proceeding of such characteristics. This is the case, for example, of the Commission of Justice President, Janet Rivas, who abstained from voting in the scandalous case of former Congressman Freddy Diaz (now in prison for sexual assault against a Congress worker inside the Congress building itself). Congresswomen Maria Acuña Peralta, Rosio Torres and Heidi Juárez were reported by Congress workers for unjustified and illegal cuts in their wages. Finally, Congressman Elvis Vergara was accused by all sides of being part of a criminal organization known as "Los Niños", which would have thrived under the protection of former President Castillo. These are none other than the "Judges" who will conduct the summary proceeding for gross misconduct.

If we know something for sure is that nothing good for the country will come out of that Commission.)))

¹ adj. Law. Of a trial: A type of trial, civil or criminal, which proceeding is very brief, whether for the urgency or simplicity of the litigation, or due to the severity or flagrancy of the criminal action.

² dismissal of former advisor Efraín Anaya Cárdenas (2010) and the 7 former advisors of the extinct National Magistrates' Council, for the now famous case, "Cueros Blancos del Puerto", which was indeed serious.

Deducibilidad de pagos por indemnizaciones o penalidades y recientes pronunciamientos jurisprudenciales

En nuestra opinión, el pago de indemnizaciones o penalidades, en virtud de un contrato, son deducibles para efectos fiscales en tanto su devengo es un riesgo propio de la ejecución contractual y, por ende, se encuentra relacionado con la generación de rentas gravadas.

Esta posición había sido aceptada por el Tribunal Fiscal a lo largo de los años como, por ejemplo, en la RTF n.º 17929-3-2013, en la que indicó que: “es deducible la penalidad pagada por incumplimiento de una obligación contractual, asumida en desarrollo de las actividades del giro del negocio, pues proviene de un riesgo inherente a dicho desarrollo, por lo que existe una relación entre el egreso y la generación de la renta gravada”.

No obstante, existe un pronunciamiento de Corte Suprema de Justicia de la República, recaído en la casación n.º 8407-2013 LIMA, que ha venido siendo acatado por jueces, tribunales y la Sunat, conforme con el cual todos aquellos gastos en que se incurra para resarcir un daño, como una indemnización o penalidad, no son deducibles.

En la referida casación, el Poder Judicial señaló que: “se advierte que la indemnización pagada (...) no constituye un gasto deducible al impuesto a la renta en los términos fijados en el artículo 37 del Texto Único de la Ley del Impuesto a la Renta, en tanto dicho gasto no cumple con el principio de causalidad con el hecho generador de la renta, por tanto, la afirmación efectuada por el Tribunal Fiscal implicaría avalar la conducta de quien incumple un contrato y pretende valerse de dicha trasgresión para obtener beneficios tributarios”.

Como se puede apreciar, la posición de la Corte Suprema es que nadie puede beneficiarse de un acto u omisión propio, situación que ocurriría cuando, por ejemplo, como consecuencia del incumplimiento de una obligación contractual se paga una indemnización o penalidad y se deduce la misma para el cálculo del impuesto a la renta. Esta es la postura que Sunat ha tomado en los últimos años, señalando que este tipo de gastos no cumpliría con el principio de causalidad al que hace referencia el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Ahora bien, recientemente el Tribunal Fiscal ha emitido nuevos pronunciamientos sobre el particular, como, por ejemplo, el recaído en la RTF n.º 01007-3-2020, en la cual al momento de analizar la deducibilidad del pago de una penalidad señaló que: “de la evaluación de la documentación se tiene que la recurrente acreditó que estaba obligada a pagar una penalidad, lo cual se encontraba contemplado en el contrato (...) en tal sentido se concluye que dicho gasto es deducible”.

Como se puede apreciar, este es un tema aún muy discutido sobre el cual no existe aún una posición definitiva. No obstante, como indicamos, somos de la opinión que en la medida que se pueda acreditar que los referidos gastos por indemnizaciones o penalidades corresponden a una obligación contractual y se encuentran relacionados con la generación de rentas gravadas, estos deben ser deducibles.)))



CÉSAR ANGULO GAUTHIER

Asociado senior, especialista en derecho tributario y Fintech

Senior Associate, specialist in tax and fintech

cangulo@munizlaw.com

Deductibility of indemnification or penalty payments and recent case-law rulings

In our opinion, the payment of indemnifications or penalties, under a contract, is deductible for tax purposes, as their accrual is a risk inherent to the execution of a contract and, therefore, it is related to the generation of taxable income.

This stance had already been accepted by the Tax Court over the years; for instance, in RTF (Tax Court Resolution) 17929-3-2013, in which the Court indicated that: "The penalty paid for the breach of a contractual obligation, assumed during the course of activities in the line of business, is deductible, since it comes from a risk inherent to such activities; therefore, there is a connection between the expense and the generation of the taxable income."

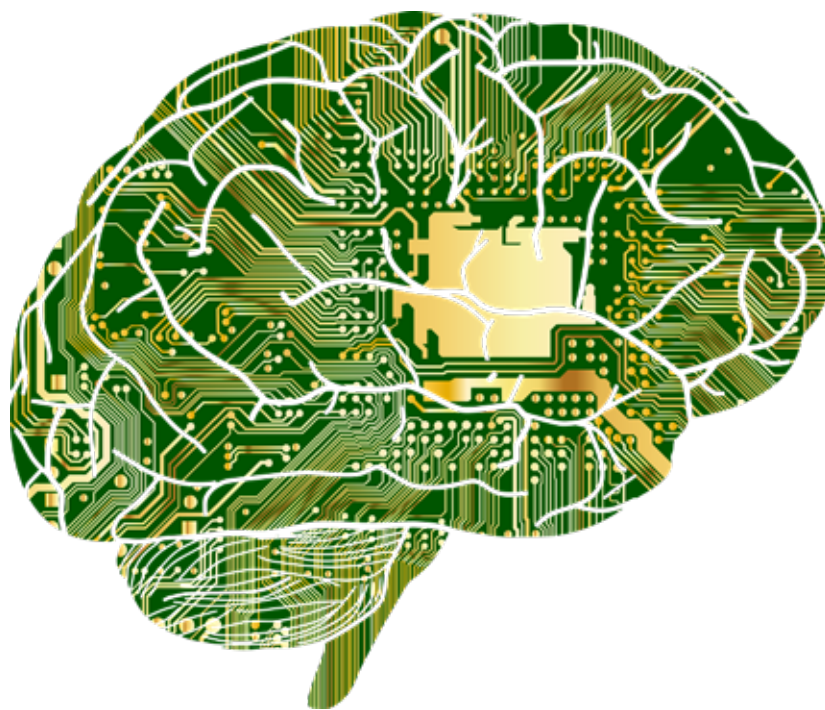
However, the Supreme Court of Justice of the Republic issued a ruling, in cassation 8407-2013 LIMA, which has been obeyed by judges, courts and the Peruvian tax authority (Sunat), and according to which every expense incurred to compensate a damage, such as an indemnification or penalty, is not deductible.

In the aforementioned cassation, the Judiciary stated that: "It should be noted that the indemnification paid (...) is not an expense deductible from income tax in the terms set forth in Article 37 of the Consolidated Text of the Income Tax Law, since such an expense does not meet the principle of causality with the income-generating event. Consequently, the statement by the Tax Court would imply endorsing the conduct of someone who breaches a contract and intends to use the breach to obtain tax benefits."

As can be seen, the stance of the Supreme Court is that no one can benefit from their own action or failure to act, a situation that would occur when, for instance, as a result of the breach of a contractual obligation, an indemnification or penalty is paid and also deducted for the calculation of the income tax. This is the stance SUNAT has adopted in recent years, pointing out that this type of expense would not meet the principle of causality referred to in Article 37 of the Income Tax Law.

That said, recently, the Tax Court issued new rulings on this matter, such as that of RTF No. 01007-3-2020, in which, when evaluating the deductibility of the payment of a penalty, it stated that: "From the document assessment it is clear that the appellant proved they were obliged to pay a penalty, which was provided for in the contract (...) in this sense, it is concluded that said expense is deductible."

As can be seen, this is still a much discussed issue on which there is no definitive standpoint yet. Nevertheless, as previously indicated, our opinion is that, to the extent that the referred expenses for indemnities or penalties paid can be proven to correspond to a contractual obligation and are related to the generation of taxable income, they should be deductible.))



¿Transformación digital + IA > ciberataques?

La entrada en vigor de la Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial¹, (IA) así como de la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital², son un claro recordatorio sobre el impacto que la innovación tecnológica ha generado en nuestro país que busca además colocar a la ciberseguridad como una prioridad.

Como sabemos, al igual que la disrupción digital, los ciberataques dirigidos a organizaciones y usuarios -que ocasionan brechas de datos de cualquier clase- crecen en volumen y complejidad, por lo que es necesario buscar que la inteligencia artificial tenga como propósito: (i) prevenir e identificar amenazas; (ii) detectar ciberataques mediante un sistema que permita la trazabilidad al interior de la organización; y, en consecuencia, (iii) pueda generar procesos de respuesta a estos ciberataques a fin de evitar reincidencias.

Ahora bien, sin perjuicio de lo ya señalado, no se debe perder de vista que la IA podría ser susceptible a fallos (aún como mecanismo de seguridad) o que la calidad de los datos pudiera generar sesgos en los resultados, impactando negativamente en el negocio. En ese sentido, resulta imperativo que se logren diseñar dispositivos legales con mecanismos preventivos que mitiguen los riesgos generados por el uso de dicha tecnología, así como alternativas de solución ante posibles controversias. Todo ello sin limitar el uso de esta importante herramienta, y buscando que la IA se convierta en aliada y no en obstáculo.

En esa línea, conviene mencionar que si bien nuestra regulación en materia de privacidad -Ley de protección de datos personales y su reglamento- no establece la obligatoriedad de comunicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos

¹ Ley N° 31814 – Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05/07/2023.

² Decreto Supremo N° 085-2023-PCM, que dispuso aprobar la Política Nacional de Transformación Digital al 2030, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28/07/2023.



Personales las filtraciones indebidas y/o brechas de seguridad de datos personales, aun cuando sea probable que constituyan un riesgo para los derechos y libertades de las personas; lo cierto es que las referidas normas sí disponen que los titulares de bancos de datos deban adoptar e implementar de manera efectiva medidas de seguridad de índole técnica, legal y organizativa que garanticen el uso adecuado de los datos.

Así, de encontramos ante una eventual amenaza de filtración y/o brecha de datos generada por un ciberataque, será importante (i) verificar con qué clases de medidas de seguridad cuenta la organización, lo cual permitirá a su vez (ii) determinar el tipo de amenaza o, en su defecto, el alcance de la filtración, así como (iii) confirmar los tipos de datos comprometidos en la brecha. Todo ello permitirá finalmente (iii) documentar las medidas adicionales que debe adoptar la organización para mitigar este incidente y futuros eventos de similar naturaleza.))

Resulta imperativo que se logren diseñar dispositivos legales con mecanismos preventivos que mitiguen los riesgos generados por el uso de dicha tecnología, así como alternativas de solución ante posibles controversias. Todo ello sin limitar el uso de esta importante herramienta, y buscando que la IA se convierta en aliada y no en obstáculo.



CAMILA MALLQUI ESCALANTE

Asociada, especialista en competencia, barreras burocráticas y antidumping

Associate, specialist in competition, bureaucratic obstacles and antidumping

cmallqui@munizlaw.com

Digital transformation + AI > cyberattacks?

The entry into force of the Law promoting the use of artificial Intelligence¹ (AI), as well as the implementation of the National Digital Transformation Policy², are a clear reminder of the impact generated by technological innovation in our country, which also seeks to place cybersecurity as a priority.

As we know, cyberattacks, like digital disruption, when directed towards organizations and users -which cause data breaches of any type- grow in volume and complexity, therefore it is necessary to seek artificial Intelligence to have the following purposes: (i) prevent and identify threats; (ii) detect cyberattacks through a system that allows traceability inside an organization; and, as a result, (iii) it may generate response processes to those cyberattacks in order to avoid recidivism.

Now, notwithstanding the aforementioned, it should be taken into consideration that AI may be susceptible to errors (even as a security mechanism) or that the quality of the data may generate bias in the results, thus having a negative impact in the business. In this regard, it is imperative to design legal provisions that include preventative mechanisms to mitigate the risks generated by the use of said technology, as well as solution alternatives to possible disputes. All this without restricting the use of this important tool and looking for AI to turn into an ally and not an obstacle.

In this respect, it should be noted that, although our law regarding privacy -Personal Data Protection Act and its regulations- does not set out it is mandatory to communicate the National Authority on Personal Data Protection of the undue leaks and/or breaches on personal data security, even though they are likely to be a risk for individuals rights and freedoms. Truth to be told, said rules do provide data bank holders to effectively adopt and implement technical, legal and organizational security measures that ensure a proper use of data.

Thus, if we face an eventual leak and/or breach of data threat generated by a cyberattack, it will be important (i) to verify what types of security measures the organization has, which will, in turn, allow (ii) to determine the type of threat or, otherwise, the scope of the leak, as well as (iii) to confirm the types of data compromised in the breach. All of this will finally allow (iii) to document the additional measures the organization should adopt to mitigate this incident and future events of a similar nature.)))

¹ Act No. 31814, Law promoting the use of artificial Intelligence in favor of the economic and social development of the country, published in El Peruano Official Journal, on July 5, 2023.

² Supreme Decree No. 085-2023-PCM, that provided the approval of the National Digital Transformation Policy towards 2030, published in El Peruano Official Journal on July 28, 2023.

MODIFICAN ASPECTOS DE NORMAS TÉCNICAS DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Hacemos de conocimiento que, el martes 11 de agosto se publicó en el diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo n.º 022-2023-SA, Decreto que modifica las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por Decreto Supremo n.º 003-98-SA.

¿Cuál es la finalidad de la norma?

Modificar las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por Decreto Supremo n.º 003-98-SA.

¿A quién le es aplicable?

A las empresas del sistema asegurador y los asegurados.

¿Cuándo entra en vigencia?

La modificación al reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Cambios o modificaciones:

Este dispositivo modifica el primer y segundo párrafo del artículo 20 de las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, según se detalla a continuación:

Texto anterior	Nuevo texto
<p>Artículo 20.- Reajuste de las Pensiones</p> <p>Las pensiones pactadas en moneda nacional serán imperativamente reajustadas en la forma prevista por el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, según el Índice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática o el indicador que lo sustituya, en los periodos que se inician los meses de enero, abril, julio y octubre, tomando en consideración la inflación acumulada en el trimestre anterior.</p> <p>Las pensiones pactadas en moneda extranjera se sujetarán a las reglas que para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones apruebe la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.</p> <p>Los beneficios de esta cobertura no pueden ser inferiores a los que brinda el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), regido por el Decreto Ley N° 25897 y sus reglamentos. En consecuencia, cualquier modificación dispuesta en la normatividad sobre esa materia, será automáticamente aplicable a los nuevos contratos de seguro que para la cobertura de Invalidez y Gastos de Sepelio se celebren con posterioridad al inicio de vigencia de la norma correspondiente.</p>	<p>Artículo 20.- Reajuste de las Pensiones</p> <p>Las pensiones que se otorgan en el marco del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo pueden ser otorgadas en moneda nacional o moneda extranjera, con el tipo de reajuste pactado, según lo convenido en la póliza correspondiente contratada por el empleador. Las pensiones pactadas en moneda nacional pueden ser reajustadas, según el índice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática o el indicador que lo sustituya, o a una tasa fija anual no menor del 2% con actualización en los periodos que se inician los meses de enero, abril, julio y octubre.</p> <p>Las pensiones pactadas en moneda nacional y extranjera se sujetan a las reglas que para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones apruebe la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).</p> <p>Los beneficios de esta cobertura no pueden ser inferiores a los que brinda el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (AFP), regido por el Decreto Ley N° 25897 y sus reglamentos. En consecuencia, cualquier modificación dispuesta en la normatividad sobre esa materia, será automáticamente aplicable a los nuevos contratos de seguro que para la cobertura de Invalidez y Gastos de Sepelio se celebren con posterioridad al inicio de vigencia de la norma correspondiente.</p>





MODIFICATION OF THE TECHNICAL STANDARDS OF THE COMPLEMENTARY OCCUPATIONAL RISK INSURANCE

We hereby make of public knowledge that on Tuesday, August 11, Supreme Decree No. 022-2023-SA was published in El Peruano Official Journal. This Decree amends the Technical Standards of the Complementary Occupational Risk Insurance approved by Supreme Decree No. 003-98-SA.

What is the purpose of this regulation?

Modify the Technical Standards of the Complementary Occupational Risk Insurance approved by Supreme Decree No. 003-98-SA.

Who is it applicable to?

Insurance companies and the insured individuals.

When does it become effective?

The modification to the regulations will become effective as of the day after its publication.

Changes or modifications:

This provision modifies the first and second paragraphs of article 20 of the Technical Standards of the Complementary Occupational Risk Insurance, as follows:

Previous text:	New text:
<p>Article 20.- Pension Readjustment</p> <p>Pensions agreed in national currency will be imperiously readjusted in the manner provided by the Private Pension Fund Management System, according to the Consumer Price Index prepared by the National Institute of Statistics and Information Technology or the indicator replacing it, in the periods beginning in January, April, July and October, taking into consideration the inflation accumulated in the previous quarter.</p> <p>Pensions agreed in foreign currency will be subject to the rules approved by the Superintendence of Pension Fund Administrators for affiliates of the Private Pension System.</p> <p>The benefits of this coverage can not be less to those provided by the Private Pension Fund Management System (AFP), governed by Executive Order No. 25897 and its regulations. As a consequence, any modification provided for in the regulations on this matter will be automatically applicable to the new insurance contracts entered into for coverage of Disability and Burial Insurance after the effective date of the corresponding regulation.</p>	<p>Article 20.- Pension Readjustment</p> <p>Pensions granted under the Complementary Occupational Risk Insurance may be granted in local or foreign currency, with the agreed adjustment rate, as agreed in the corresponding insurance policy contracted by the employer. Pensions agreed in local currency may be readjusted according to the Consumer Price Index prepared by the National Institute of Statistics and Information Technology or the indicator replacing it, or at a fixed annual rate of not less than 2% updated in the periods beginning in January, April, July and October.</p> <p>Pensions agreed in local and foreign currency are subject to the rules approved by the Superintendence of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) for affiliates of the Private Pension System.</p> <p>The benefits of this coverage can not be less to those provided by the Private Pension Fund Management System (AFP), governed by Executive Order No. 25897 and its regulations. As a consequence, any modification provided for in the regulations on this matter will be automatically applicable to the new insurance contracts entered into for coverage of Disability and Burial Insurance after the effective date of the corresponding regulation.</p>



El periodo de adecuación ambiental en actividades industriales manufactureras y de comercio interno

El 3 de julio de 2023 se cumplió el plazo máximo para la presentación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de las actividades industriales manufactureras y de comercio interno que les corresponde contar con dicho instrumento de gestión ambiental de tipo correctivo, conforme al Decreto Supremo n.º006-2019-PRODUCE, norma que modificó el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º017-2015-PRODUCE.

El Decreto Supremo n.º006-2019-PRODUCE (vigente desde el 28 de junio de 2019) estableció un periodo de adecuación ambiental progresivo, excepcional y temporal, para la diversidad de actividades bajo la competencia ambiental del Ministerio de la Producción (más de 100 actividades industriales y de comercio interno, tales como: elaboración de alimentos, fabricación de muebles, industria textil, fabricación de productos farmacéuticos, etc.), debido a que sus predecesoras –el Decreto Supremo n.º97-ITINCI y la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto

Supremo n.º017-2015-PRODUCE– no alcanzaron los objetivos deseados.

La adecuación ambiental estuvo dirigida a aquellos titulares que iniciaron actividades sin contar con el respectivo instrumento de gestión ambiental y que, por sus características y en el entorno en donde se desarrollan, requieren del instrumento de gestión ambiental de tipo correctivo (Declaración de Adecuación Ambiental – DAA o PAMA), según los impactos ambientales negativos que generan (leves o relevantes), a fin de corregir, controlar, mitigar, etc., dichos impactos.

Así, mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo n.º006-2019-PRODUCE, se dispuso que los titulares de las actividades de la industria manufacturera o de comercio interno que, según los supuestos de la norma requieran adecuarse ambientalmente a través de una DAA, deben presentarla ante el Ministerio de la Producción en un plazo máximo de 24 meses, contados a partir del 28 de junio de 2019. Asimismo, estableció que aquellos que requieran adecuarse a través de un PAMA,

deben presentarlo en un plazo máximo de 24 meses, contados a partir del 29 de junio de 2021¹.

Las condiciones generales y específicas, señaladas en el anexo del Decreto Supremo n.º006-2019-PRODUCE, para la presentación de la DAA o el PAMA, por cada actividad, está relacionado con el entorno en donde se ubican, la falta de medidas de manejo ambiental, características del proceso industrial, entre otras. Aquellos titulares de actividades que no se encuentran en las condiciones no están obligados a presentar la DAA o el PAMA en los referidos plazos.

Durante el periodo de adecuación ambiental los titulares de las actividades consignadas en el anexo de la norma no incurrir en infracción administrativa sancionable.

¿Cuáles son las consecuencias de no haber presentado la DAA o el PAMA dentro de los plazos legales establecidos?

Aquellos titulares de las actividades que debieron presentar la DAA o el PAMA y no cumplieron dentro de los plazos podrán hacerlo solo como resultado de la supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), sin perjuicio de la sanción y medidas administrativas que correspondan.

La infracción administrativa por desarrollar actividades sin contar con el instrumento de gestión ambiental aprobado puede ser sancionada con multa de hasta 30 000 UIT, así como la imposición de medidas administrativas. Por citar un ejemplo, solo a modo de referencia, en una actividad de fundición, se sancionó con una multa de 55.20 UIT² y con la imposición de la medida de cese de actividades hasta contar con el instrumento ambiental aprobado. En tal sentido, en cada caso, el OEFA evaluará los factores agravantes o atenuantes o eximentes de responsabilidad, así como la aplicación del criterio de no confiscatoriedad para imponer la sanción y medidas administrativas.

Por tanto, si bien la autoridad no cierra la puerta para la adecuación ambiental (como sí sucede en otros sectores), priorizando de esta manera la adopción de medidas de manejo ambiental, en un sector comprendido mayoritariamente por micro y pequeñas empresas, es necesario que como parte

de la evaluación del impacto de la norma considere la situación excepcional de emergencia sanitaria por COVID-19, el proceso de recuperación económica en este contexto, entre otros factores, para justificar la pertinencia de aprobar una ampliación del periodo de adecuación ambiental, así como las mejoras para contribuir en su cumplimiento.]]

El 3 de julio de 2023 se cumplió el plazo máximo para la presentación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de las actividades industriales manufactureras y de comercio interno que les corresponde contar con dicho instrumento de gestión ambiental de tipo correctivo, conforme al Decreto Supremo n.º006-2019-PRODUCE, norma que modificó el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante el Decreto Supremo n.º017-2015-PRODUCE.



CECILIA TORRE SANDOVAL

Asociada senior, especialista en derecho ambiental
Senior associate, specialist in environment
ctorre@munizlaw.com

¹ La autoridad consideró como último día de presentación del PAMA el 3 de julio de 2023, debido a que el 29 de junio de 2023 fue declarado como no laborable.

² RD N°1453-2018-OEFA/DFAI de fecha 28.06.2018.

The environmental adjustment period in industrial manufacturing and internal trade activities

On July 3, 2023, the deadline for the submission of the Environmental Adjustment and Management Program (PAMA, acronym in Spanish) for industrial manufacturing and internal trade activities that must have this remedial environmental management instrument, pursuant to Supreme Decree No. 006-2019-PRODUCE, a rule that modified the Regulations on Environmental Management for the Manufacturing Industry and Internal Trade, approved by Supreme Decree No. 017-2015-PRODUCE.

Supreme Decree No. 006-2019-PRODUCE (in force since June 28, 2019) set out a progressive, exceptional and temporary environmental adjustment period, for the diversity of activities under the environmental competence of the Ministry of Production (more than 100 industrial and internal trade activities, such as: food production, fabrication of furniture, textile industry, pharmaceutical product manufacturing, etc.), as its predecessors -Supreme Decree No. 97-ITINCI and the Fourth Final Supplementary Provision of Supreme Decree No. 017-2015-PRODUCE- did not meet the desired goals.

Environmental adjustment was aimed at those holders who started their activity without the corresponding environmental management instrument and who, by their characteristics and the environment where they develop their activities, need the remedial environmental management instrument (Declaration of Environmental Adjustment - DAA or PAMA, acronyms in Spanish), according to the environmental impacts they generate (mild or relevant), so as to correct, control, mitigate, etc., such impacts.

Thus, by the First Final Supplementary Provision of Supreme Decree No. 006-2019-PRODUCE, it was set out that holders of manufacturing or internal trade activities which, according to the rule assumptions need the environmental adjustment by a DAA, will submit it before the Ministry of Production in a period no longer than 24 months, as from June 28, 2019. Likewise, it set forth that those who need adjustment through a PAMA, will submit it in a period no longer than 24 months, as from June 29, 2021¹.

The general and specific conditions, indicated in the annex of Supreme Decree No. 006-2019-PRODUCE, for the submission of the DAA or PAMA for each activity, are related

to the environment they are located, the lack of environmental management measures, characteristics of the industrial process, among others. The holders of activities that do not meet the conditions are not required to submit a DAA or PAMA in the aforementioned periods.

During the environmental adjustment period, the holders of the activities listed in the annex to the rule do not incur in punishable administrative offenses.

What are the consequences of failing to submit the DAA or PAMA within the established legal deadlines?

Activity holders who should have submitted the DAA or PAMA and failed to comply within the deadlines may be allowed to do so only as a result of the supervision of the Environmental Assessment and Enforcement Agency (OEFA, acronym in Spanish), notwithstanding of the corresponding sanction and administrative measures.

The administrative offense for conducting activities without an approved environmental management instrument can be sanctioned with a fine of up to 30,000 Peruvian Taxation Units, as well as the imposition of administrative measures. For example, and just for reference, a smelting activity was penalized with a fine of 55.20 Peruvian Taxation Units² and with a measure to shut down the activity was applied until they received the approval of the environmental instrument. In this regard, for each case, the OEFA will evaluate the aggravating, mitigating or exempting of liability factors, as well as the application of the non-confiscatory criteria to impose sanctions and administrative measures.

Therefore, although the authority does not rule out environmental adjustment (as is the case with other sectors), thus prioritizing the adoption of environmental management measures in a sector that mainly consists of micro and small businesses, it needs to take into consideration, as part of the assessment of the rule impact, the exceptional health emergency situation due to COVID-19, the economic recovery process within this context, among other factors, to justify the relevance of approving an extension of the environmental adjustment period, as well as improvements to contribute to its enforcement.)))

¹ The authority considered July 3, 2023 as the last date for submission of the PAMA, since June 29, 2023 was declared a non-working day.

² RD N°1453-2018-OEFA/DAI dated 06/28/2018.

Los convenios de administración de bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio cultural

La Huaca Pucllana es uno de los casos emblemáticos del impacto positivo que tiene la recuperación de un monumento arqueológico en el espacio urbano de Lima y de las posibilidades que tiene el sector privado para contribuir en ello (Málaga, 2018)¹. Pasó de estar casi invadida en la década de los 60 a tener la gran pirámide restaurada, un programa de visitar guiadas, conservación de piezas arqueológicas, programación cultural, programas y talleres de educación, salas, paseos inclusivos, publicaciones y hasta servicios corporativos (Málaga, 2018). La decisión de la Municipalidad de Miraflores y del INC de la época rindió frutos: la concesión al restaurante Huaca Pucallana daría los recursos necesarios para implementar todo lo que puede hacerse en un bien único.

No obstante, la regla general es que el sistema regulatorio de la protección de bienes inmuebles patrimoniales no

asegure una sostenibilidad de un esfuerzo por recuperar dichos inmuebles, sino que solo se limita a establecer prohibiciones y regulaciones sobre la posesión de los inmuebles y alientan niveles de protección básicos (López, Media y Paredes, 2021)². En parte, porque se ha monopolizado en las entidades públicas el rol de cautelar la integridad de estos. Frente a ello, una de las posibilidades para asegurar la sostenibilidad de estos bienes es ampliar la cantidad de *stakeholders*³ no estatales que puedan colaborar en dicha tarea bajo ciertas condiciones. Una de las últimas modificaciones a la Ley de Patrimonio Cultural va en ese sentido.

Convenios de administración

Los convenios de gestión⁴ son la forma contractual para que terceros del sector privado puedan administrar bienes inmuebles prehispánicos⁵ de propiedad pública integrantes del patrimonio cultural. No solo pueden

¹ MÁLAGA Crisia 2018 "Gestión del Patrimonio: Huaca Pucllana" En MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES. Aprender haciendo. Aportes de la Municipalidad de Miraflores para el buen gobierno. Lima: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018.

² LÓPEZ et. al 2021 Inversión en Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación: Análisis de la regulación aplicable al Centor de Lima. Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener el grado de Magister en Finanzas y Derecho Corporativo. ESAN: Graduate School of Business.

³ Existen tres antecedentes. El primero es la Ley N° 29164 de 2007 que fijó condiciones para favorecer y promocionar el desarrollo de la inversión privada que permite recuperación, conservación, puesta en valor y desarrollo de los bienes inmuebles patrimoniales. A grandes rasgos, la ley dispone un tipo de concesión para servicios turísticos con la finalidad de obtener que sean dedicados al cuidado de estos bienes. La segunda es el derogado Decreto Legislativo N° 1198 de 2015, que creaba la figura de Convenios de Gestión Cultural, el antecedente más parecido y cercano a los actuales Convenios de Administración. El tercero son las obras por impuestos establecidas en la Ley N° 29230, que se pueden hacer para proyectos de inversión en materia de cultura.

⁴ Artículo 53 de la Ley N° 31770.

⁵ Los únicos bienes integrantes excluidos de estas disposiciones son los declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (Por ej. Machu Picchu, Chan Chan, Manu, Caral, etc).



suscribir estos convenios empresas privadas, sino también fundaciones, patronatos, asociaciones de la sociedad civil, ONG, junta de propietarios o vecinos, entre otros.

Por el contrario, la suscripción de estos no significa privatización, concesión, asociación público-privada, ni tampoco modificación alguna a la propiedad del Estado sobre el patrimonio, ni modificación de su condición cultural. Se suscriben de manera voluntaria y a solicitud de la entidad que lo requiera, siempre y cuando acompañe opinión favorable del gobierno local de la jurisdicción en la que se ubica el bien inmueble.

Estos convenios de administración deben contener, bajo sanción de nulidad, la obligación del privado de poner en valor o mantener actividades y el buen estado del inmueble y pueden autorizar el desarrollo de otras actividades sin poner en riesgo el inmueble, respetando los parámetros que se establezcan para salvaguardar el valor patrimonial de este. Su vigencia no puede exceder de 10 años renovables por un periodo similar, siempre y cuando no varíe o altere el propósito de este.

El Ministerio de Cultura aquí tiene un rol clave. Por un lado, suscribe los convenios de administración con

entidades públicas, privadas o público-privadas, a fin de concederles autorización para la administración compartida de bienes inmuebles prehispánicos, siempre que garanticen su protección, investigación, conservación, restauración o puesta en valor, respetando las formalidades y procedimientos administrativos.

Por otro lado, promueve y regula la gestión participativa de los sectores público y privado, y de la sociedad civil con fines de protección, investigación, conservación, preservación, restauración o puesta en valor, entre otros, de los bienes inmuebles de carácter prehispánico favoreciendo su acceso y uso social.

Por último, la Ley n.º 31770 establece que los convenios se otorgarán bajo modalidad de concurso de proyectos, modalidad usada para la contratación de consultorías de obra para elaboración de expediente técnico de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se evalúa la propuesta arquitectónica⁶.

Retos y oportunidades

“Este mecanismo constituye una oportunidad para que las empresas puedan generar valor compartido no solo económico, cerca de lugares donde están las empresas”, dice Giancarlo Marcone⁷, arqueólogo y director del Centro de Impacto y Responsabilidad

⁶ Artículo 85 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

⁷ Entrevista personal del 11 de agosto de 2023.

Social – CIRSO de UTEC. Marcone menciona que las empresas deben enfocar sus intervenciones con una mirada de sostenibilidad y generación de valor social para las comunidades y vecindarios.

Entre los retos tenemos las autorizaciones y permisos necesarios para llevar a cabo este tipo de proyectos. Los convenios no están exonerados del cumplimiento del nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueológicas⁸ para acciones de investigación, registro, análisis, conservación, puesta en valor y gestión del inmueble prehispánico; así como las acciones de arqueología preventiva como evaluación, rescate y monitoreo. Asimismo, para las intervenciones que se puedan pactar se debe tener en consideración las licencias de edificación ante las municipalidades distritales con la participación de los delegados ad hoc de cultura⁹.

Todos estos títulos habilitantes pueden demorar más de 1 año en emitirse. Según Aldo Facho¹⁰, urbanista y presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo del Hábitat Regional y Urbano, un reto es la certeza respecto a los procesos y pasos a seguir cuando se quiere intervenir una bien patrimonial.

Otro reto son las técnicas de conservación rigurosas, la falta de equipos altamente especializados, y la complejidad de la gestión de bienes públicos y privados con regulaciones intensas. Rosabella Álvarez-Calderón¹¹, arqueóloga y especialista en temas de patrimonio y ciudad, hace hincapié en los recursos humanos: “hay poco conocimiento y transmisión del conocimiento de experiencias para trabajar estos bienes”.

Si bien la complejidad y costos que pueden ser un desincentivo para que más actores no estatales se comprometan a firmar convenios de gestión, para Alejandro Cavero, congresista de la república y miembro de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural: “el potencial que tienen nuestros sitios patrimoniales es enorme y le da un valor agregado

al proyecto que se quiera ejecutar”¹², dice.

Solo en la capital hay más de 360 sitios arqueológicos prehispánicos actualmente insertados en la trama urbana; sitios abandonados que no son parte de la vida cotidiana de los limeños (Crousse, 2017)¹³. Necesitamos más que los recursos del erario para mantenerlos en pie. Es el reto.)))

⁸ Artículo 54 del Decreto Supremo N° 011-2022-MC.

⁹ Artículo 4 del Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, TUO de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

¹⁰ Entrevista Personal del 11 de agosto de 2023.

¹¹ Entrevista Personal del 5 de agosto de 2023.

¹² Entrevista Personal del 11 de agosto de 2023.

¹³ CROUSSE, Jean Pierre 2017 Urban Black Holes. Development and heritage in the metropolis of Lima.



ANDRÉS DEVOTO YKEHO

Asociado, especialista en regulación municipal y autorizaciones
Associate, specialist in Municipal Regulation and Authorizations
adevoto@munizlaw.com

Agreements for the Administration of Pre-Hispanic Properties that are Part of the Cultural Heritage

Huaca Pucllana is one of the cases that represent the positive impact of the recovery of an archaeological monument in the urban space of Lima and the possibilities the private sector has to contribute to it (Málaga, 2018)¹. It went from being almost invaded in the 1960s to having the great pyramid restored, a guided tour program, conservation of archaeological artifacts, cultural programs, education programs and workshops, halls, inclusive walks, publications, and even corporate services. (Málaga, 2018). The decision of the Municipality of Miraflores and the National Institute of Culture (INC, acronym in Spanish) at the time paid off: The concession to the Huaca Pucllana restaurant would provide the necessary resources to implement everything that can be done in a single property.

Nevertheless, the general rule is that the regulatory system for the protection of heritage property does not ensure the sustainability of an effort to recover said property, but only establishes prohibitions and regulations on the possession of property and encourages basic levels of protection (López, Media y Paredes, 2021)². This happens, in part, because the role of safeguarding the integrity of said property has been monopolized by public entities. In the face of this, one of the possibilities to ensure the sustainability of this property is to increase the number of non-state stakeholders³ that could assist in this task under certain conditions. One of the last amendments of the Cultural Heritage Law goes along these lines.

Management Agreements

Management agreements⁴ are the contractual way for third parties to the private sector to administer publicly-owned pre-Hispanic properties⁵ that are part of the cultural heritage. These agreements can be signed not only by private companies, but also by foundations, trusts,

civil society associations, NGOs, owners or neighbors' associations, among others.

On the contrary, signing these agreements does not mean privatization, concession, public-private partnership, or any modification whatsoever to the ownership of the State over the heritage property, or the modification of its cultural status. They are signed voluntarily and at the request of the entity that requires it, as long as it has the favorable opinion of the local government of the jurisdiction where the property is located.

These management agreements shall contain, under penalty of nullity, the obligation of the private party to enhance the value or maintain the activities and the good condition of the property, and may authorize the development of other activities without risking the property, respecting the parameters established to safeguard the heritage value thereof. Their term shall not exceed 10 years, renewable for a similar period, as long as the purpose thereof is not changed or altered.

Here, the Ministry of Culture plays a key role. On the one hand, they enter into management agreements with public, private or public-private entities in order to grant them authorization for the shared administration of pre-Hispanic property, as long as they guarantee the protection, research, conservation, restoration or enhancement thereof, respecting administrative formalities and procedures.

On the other hand, they promote and regulate the participatory management of the public and private sectors, and of civil society for the protection, research, conservation, preservation, restoration or enhancement, among others, of pre-Hispanic property, favoring access to it and its social use.

¹ MÁLAGA Crisia 2018 "Gestión del Patrimonio: Huaca Pucllana" ("Heritage Management: Huaca Pucllana") at the MUNICIPALITY OF MIRAFLORES. *Aprender haciendo. Aportes de la Municipalidad de Miraflores para el buen gobierno. (Learning by Doing. Contributions of the Municipality of Miraflores for Good Governance.)* Lima: School of Government and Public Policy. Pontificia Universidad Católica del Perú (Pontifical Catholic University of Peru), 2018.

² LÓPEZ et. al 2021 *Inversión en Inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación: Análisis de la regulación aplicable al Centro de Lima. (Investment in Property Pertaining to the Nation's Cultural Heritage: Analysis of the Regulations Applicable to Downtown Lima.)* Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master in Finance and Corporate Law. ESAN: Graduate School of Business.

³ There are three previous cases. The first one is Law No. 29164, from 2007, which sets out conditions to favor and promote the development of private investment, allowing the recovery, conservation, enhancement and development of heritage property. Broadly speaking, this law provides for a type of concession for tourist services that aim at devoting them to taking care of this property. The second case is the repealed Legislative Order No. 1198, from 2015, which created the concept of Cultural Management Agreements, the most similar and closest to the current Management Agreements. The third case is work for taxes established by Law No. 29230, which can be applied to investment projects in the field of culture.

⁴ Article 53 of Law No. 31770.

⁵ The only properties excluded from these provisions are those declared World Heritage Sites by Unesco (e.g: Machu Picchu, Chan, Manu, Caral, etc.).

Finally, Law No. 31770 establishes that these agreements shall be awarded through project tendering, a method used to hire construction consultancies to prepare the technical file for urban works, buildings and similar constructions, through which the architectural proposal is evaluated⁶.

Challenges and Opportunities

"This mechanism is an opportunity for companies to generate a shared value, not only economic, near places where the companies are located", says Giancarlo Marcone⁷, archaeologist and director of the Center for Impact and Social Responsibility (CIRSO, in English) from UTEC. According to Marcone, companies should focus their interventions with a view towards sustainability and creation of social value for communities and neighborhoods.

Among the challenges are the authorization and permits needed to carry out this type of project. The agreements are not exempted from complying with the new Regulation for Archaeological Interventions⁸ for research, recording, analysis, conservation, enhancement and management of the pre-Hispanic property, as well as for preventive archaeology actions such as assessment, rescue, and monitoring. Also, in the case of interventions that can be agreed upon, building licenses to be processed by district municipalities with the participation of ad hoc culture delegates are to be taken into consideration⁹.

The issuance of these enabling titles can take up to one year. According to Aldo Facho¹⁰, urban planner and chairman of the National Commission for Regional and Urban Development, one challenge is the certainty regarding the processes and steps to follow when intending to intervene a heritage property.

Another challenge is the rigorous conservation techniques, the lack of highly-specialized equipment, and the complexity of managing public and private properties with strict regulations. Rosabella Álvarez-Calderón¹¹, archaeologist and specialist in heritage and city issues, emphasizes human resources: "There is poor knowledge and transmission of knowledge of experiences to work on these properties."

Although complexity and costs can be a discouragement for more non-state stakeholders to commit to sign management agreements, for Alejandro Cavero, Congressman of the Republic and member of the Culture and Cultural Heritage Commission: "The potential of our heritage sites is enormous and adds value to the project to be executed,"¹² he says.

In the capital alone, there are more than 360 pre-Hispanic archaeological sites currently inserted into the urban grid; abandoned sites that are not part of the daily life of Lima inhabitants (Crousse, 2017.)¹³ We need more than treasury resources to keep them standing. That is the challenge.)))

⁶ Article 85 of the Regulations of the Procurement Law.

⁷ Personal interview; August 11, 2023.

⁸ Article 54 of Executive Order No. 011-2022-MC.

⁹ Article 4 of Executive Order No. 006-2017-VIVIENDA, Consolidated Text of Law No. 29090, Law Regulating Urban Developments and Buildings.

¹⁰ Personal interview; August 11, 2023.

¹¹ Personal interview; August 5, 2023.

¹² Personal interview; August 11, 2023.

¹³ CROUSSE, Jean Pierre 2017 Urban Black Holes. Development and heritage in the metropolis of Lima.



En el tercer trimestre del 2023 destacaron dos proyectos de ley que serán debatidos en las comisiones del Congreso de la República. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Fondo de compensación para pescadores artesanales afectados por oleajes anómalos¹

Mediante el Proyecto de Ley n.º 5638², se busca crear un Fondo de Compensación por oleaje anómalo, fenómenos naturales y antrópicos en beneficio de los pescadores artesanales, actividades turísticas y actividades productivas conexas. Esta iniciativa tiene carácter de aporte complementario social de naturaleza permanente, intangible, inembargable e independiente.

La norma señala que el Fondo de Compensación contará con un Consejo Directivo que vigilará que los recursos sean destinados a los fines establecidos en la ley y su reglamento, aprobará que se realicen estudios preliminares sobre fenómenos climáticos que puedan ocasionar algún riesgo a la pesca artesanal y aprobará la entrega de bonos de compensación e indemnización para los afectados.

El financiamiento de este fondo estaría compuesto por aportes de los gobiernos regionales y locales, 70% de los ingresos y fondos recaudados por la Autoridad Nacional Marítima, Dicapi, a través del Decreto Legislativo 01147, donaciones y aportes privados, intereses que pueda generar el propio fondo, entre otros.

Reforma de pensiones por parte del Ejecutivo³

La Comisión Multisectorial integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentará en setiembre su propuesta de reforma de pensiones, en representación del Poder Ejecutivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que este proyecto contemplará aportes voluntarios y afiliación automática desde los 18 años; la reducción de las comisiones que pagan los afiliados; la opción de aumentar sus fondos de pensiones, destinando parte de los montos solicitados como devolución del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría; y el permiso a las entidades bancarias para que administren los fondos de pensiones, en lugar de que solo las administradoras de fondos de pensiones (AFP) lo hagan.

Vale recalcar que en el Congreso quedó pendiente debatir los dictámenes aprobados en la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía. El primero busca universalizar el rol del Estado en el mercado pensionario; mientras que el otro le otorga más beneficios a las AFP. De otro lado, el MEF presentó hace unas semanas su propuesta de reforma que fija una pensión mínima de S/500 en las AFP.)))

* El Estudio Muñiz presenta bimensualmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ (31 de julio de 2023). Buscan crear un fondo de compensación para pescadores artesanales afectados por oleajes anómalos. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/07/31/buscan-crear-un-fondo-de-compensacion-para-pescadores-artesanales-afectados-por-oleajes-anomalos-pesca-proyecto-de-ley-produce-congreso-2218329>

² Proyecto de ley 5638/2023-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTIxNzU2/pdf/PL0563820230731>

³ (31 de julio de 2023). MEF: Proyecto de reforma de pensiones del Ejecutivo llegará al Congreso en setiembre. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/07/31/mef-proyecto-de-reforma-de-pensiones-del-ejecutivo-llegara-al-congreso-en-septiembre-alex-contreras-congreso-sbs-bcrp-1191578>



In the third quarter of 2023, two bills that will be debated in the commissions of the Congress of the Republic stood out. Below is a summary of both legislative initiatives.

Compensation fund for artisanal fishermen affected by abnormal waves¹

Through Bill No. 5638² a Compensation Fund in case of abnormal waves, natural and anthropogenic phenomena for the benefit of artisanal fishermen, tourist activities and related productive activities. This initiative is a complementary social contribution of a permanent, intangible, unseizable and independent nature.

The rule states that there will be a Directive Council for the Compensation Fund which will oversee that the resources are used for the purposes set forth by the law and its regulations. It will also approve preliminary studies on climate phenomena that may cause any risk to artisanal fishing as well as the delivery of compensation and indemnification bonds for those affected.

The financing of this fund would consist of contributions from regional and local governments, 70% of the income and funds collected by the National Maritime Authority (Dicapi, acronym in Spanish) by Legislative Decree 01147, as well as donations, private contributions and the interest generated by the fund itself, among others.

Pension reform by the Executive Branch³

The Multisectoral Commission consisting of the Presidency of the Council of Ministers (PCM), the Ministry of Economy and Finance (MEF), the Ministry of Labor and Employment Promotion (MTPE), the Central Reserve Bank (BCR) and the Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) will submit its pension reform proposal in September, on behalf of the Executive Branch.

The Minister of Economy and Finance, Alex Contreras, pointed out that this project will include: voluntary contributions and automatic affiliation from the age of 18; the reduction of commissions paid by affiliates; the option of increasing their pension funds by using part of the amount requested as a refund to fourth and fifth category income tax; and, permission for banks to manage the pension funds, not only the Private Pension Funds Administrators (AFPs).

It is worth mentioning that the opinions approved by the Labor Committee and the Economy Committee are still pending debate in Congress. The first seeks to universalize the role of the State in the pension market, while the other grants more benefits to the AFPs. On the other hand, the Ministry of Economy and Finance submitted a few weeks ago a reform proposal setting out a minimum pension of S/500 in the Private Pension Funds.)))

* Estudio Muñiz delivers its clients the legal product "From the Congress" on a bimonthly basis. This is a publication containing a selection of the bills currently in debate in the Congress of the Republic, which can affect the business environment. Columns will include two of several published projects which are still under commissions.

¹ (July 31, 2023). A compensation fund for artisanal fishermen affected by abnormal waves in process of creation. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/07/31/buscando-crear-un-fondo-de-compensacion-para-pescadores-artesanales-afectados-por-oleajes-anomales-pesca-proyecto-de-ley-produce-congreso-2218329>

² Bill 5638/2023-CR <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTxNzU2/pdf/PL0563820230731>

³ (July 31, 2023). MEF (Ministry of Economy and Finance): Reform Bill by the Executive Branch will be seen in Congress in September. La República Perú <https://larepublica.pe/economia/2023/07/31/mef-proyecto-de-reforma-de-pensiones-del-ejecutivo-llegar-al-congreso-en-septiembre-alex-contreras-congreso-sbs-bcrp-1191578>

Comentarios a los recientes precedentes vinculantes en materia previsional

El Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus funciones de ordenación y de pacificación y haciendo uso de la facultad conferida por el artículo VI del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, emitió el 6 de julio del presente año dos nuevos precedentes en materia previsional sobre el otorgamiento de renta vitalicia y pensión de invalidez de los regímenes del Decreto Ley n° 18846 y la Ley n° 26790.

En ese sentido, en el presente artículo procederemos a realizar los respectivos comentarios, debido a la importancia de los precedentes vinculantes emitidos.

El Tribunal Constitucional en el expediente n.° 00419-2022-PA/TC desarrolla como precedente vinculante, adicionalmente a lo establecido en el precedente vinculante emitido en la sentencia n.° 02513-2007-PA/TC, la presunción del nexo de causalidad entre las enfermedades profesionales que afectan el sistema respiratorio, como la neumoconiosis, silicosis, entre otras. El mencionado precedente vinculante resalta la presunción del nexo de causalidad, en aquellos trabajadores mineros de la provincia de Yauli, La Oroya, que hayan participado directamente en la extracción o el procesamiento de minerales metálicos, referidas en el anexo 5 del Decreto Supremo n.° 009-97-SA y el Decreto Supremo n.° 008-2022-SA, durante un tiempo prologando. En la regla procesal del presente precedente vinculante se indica que dicho criterio debe ser aplicado de manera inmediata a todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional en el expediente n.° 05134-2022-PA/TC fija como precedente vinculante 6 nuevas reglas contenidas en su fundamento 35; asimismo, declaró el estado de cosas inconstitucional realizada en la sentencia emitida en el expediente n.° 00799-2014-PA/TC, parte resolutive 3, en relación con la conducta omisiva por parte del Ministerio de Salud y de Essalud de no conformar comisiones médicas calificadoras de incapacidad por enfermedad profesional en número suficiente a nivel nacional.

En la primera regla se reconoce que los dictámenes emitidos por las comisiones médicas calificadoras de incapacidad del Minsa y Essalud están dotados de fe pública.

En la segunda regla, establecen las condiciones de cuando los informes médicos pierden su valor probatorio.

La tercera regla está relacionada con la segunda, pues únicamente en dichos supuestos los dictámenes presentados por las aseguradoras demandadas, emitidos por las comisiones evaluadoras de EPS, Minsa o Essalud, pueden contradecir los dictámenes presentados por los demandantes.

En la regla cuarta, establecen que los gastos del nuevo examen médico deben ser asumidos por la parte demandada.

En la quinta regla, especifican que, de confirmarse el diagnóstico, el derecho de la pensión se otorgará desde la emisión del primer certificado médico.

En la sexta regla, detallan que la aplicación del precedente vinculante es inmediata.

En opinión de esta autora debemos concluir diciendo que los nuevos precedentes constitucionales en materia previsional muestran un gran avance en la materia mencionada, obligando a todos los operadores de justicia a su aplicación inmediata, por ser más beneficioso para los pensionistas en virtud del principio *pro persona* o *pro homine*.))



SANDRA RODRÍGUEZ CHÁVEZ

Asociada, especialista en derecho laboral y previsional - Sede Arequipa

Associate, specialist in labor and pension fund - office Arequipa
srodriguez@munizlaw.com

Comments on the current binding precedents in social security matters

The Constitutional Court, exercising its organization and pacification duties and using its powers conferred as per Article VI of the Preliminary Title of the New Constitutional Procedural Code, on July 6, 2023, issued two new precedents on social security matters regarding granting life annuity and disability pension under Executive Order No. 18846 and Law No. 26790.

In this regard, this article will include the corresponding comments due to the importance of the binding precedents issued.

In File No. 00419-2022-PA/TC, the Constitutional Court sets the presumption of a causal relationship between occupational diseases affecting the respiratory system, such as pneumoconiosis, silicosis, among others, as a binding precedent, additionally to what was set out in the binding precedent included in Ruling No. 02513-2007-PA/TC. The aforementioned binding precedent highlights the presumption of a causal relationship in the case of the mining workers of the province of Yauli, La Oroya, who had directly participated for a long time in the extraction or processing of metallic minerals, referred to in Annex 5 of Supreme Decree No. 009-97-SA and in Supreme Decree No. 008-2022-SA. The rule of court of this binding precedent states that said criteria should be immediately applied to all relief actions in process.

Conversely, on File No. 05134-2022-PA/TC, the Constitutional Court sets 6 new regulations in its legal ground No. 35 as binding precedents. Likewise, it declared the unconstitutional status quo in the ruling issued on File No. 00799-2014-PA/TC, operative part 3, regarding the Ministry of Health and Essalud omission since they did not form enough medical commissions to evaluate disabilities due to occupational diseases nationwide.

The first rule acknowledges that the opinions issued by the Minsa and Essalud medical commissions to evaluate disabilities have public trust.

The second rule sets out the conditions when medical reports lose their probative value.

The third rule is related to the second one since only in those assumptions the opinions - issued by the evaluating commissions of EPS, Minsa or Essalud - entered by the insurance companies sued can contradict the opinions entered by the plaintiffs.

The fourth rule sets out that the expenses for the new medical examination must be borne by the defendant Party.

The fifth rule specifies that, upon confirmation of the diagnosis, the right to the pension will be granted since the first medical certificate is issued.

The sixth rule explains that the application of the binding precedent is immediate.

In the opinion of the undersigned we must end saying that the new constitutional precedents in social security matters show great progress, making justice operators immediately apply them, as it is more beneficial for retired people by virtue of the pro persona or pro homine principles.)))



Oportunidades en épocas de crisis para el *private equity* o capital riesgo

Existe una figura de inversión que debemos enseñar a los emprendedores y empresarios en general para que sus negocios crezcan a un ritmo más rápido y profesional. El famoso *private equity* se ha convertido en una forma muy utilizada de captación de capital en los últimos años. Consiste en aportar recursos financieros a una empresa que generalmente no cotiza en bolsa. Esta inversión se hace por un periodo y, a cambio, el inversionista recibirá una participación accionaria en la empresa. Luego de un tiempo estas acciones serán vendidas a un tercero por un precio mucho mayor del que fueron adquiridas; de esta manera, se recuperará el capital invertido.

Este tipo de inversión financiera representa para los inversionistas una rentabilidad atractiva y se puede aplicar en distintas fases de una empresa; desde la fase inicial que representa un mayor riesgo hasta las fases donde la empresa ya se considera “madura”. Además,

para los emprendedores que deciden aceptar este tipo de financiamiento, desprendiéndose del total o parte de sus acciones en la empresa que han formado, representa la posibilidad de que su negocio crezca más rápido y tener también una mayor rentabilidad en el corto plazo.

Una vez que ingresa al capital social de una compañía a un fondo de inversión, este tendrá como objetivo hacer que las empresas se profesionalicen, crezcan y fortalezcan para que de esta manera sean más rentables. Siendo ahora parte de la empresa, los fundadores y el fondo descubrirán nuevas formas para crear generar valor que beneficiará a los inversores y a la empresa. El éxito de una inversión de *private equity* dependerá de una estrategia rápida para impulsar el crecimiento del negocio a mayor velocidad.

Invertir de esta manera suele tener buen ritmo,

inclusivo en momentos de crisis, porque se pueden encontrar buenas oportunidades en comprar negocios cuyos accionistas tienen necesidad apremiante de inversión. Es así como la rentabilidad de los fondos de *private equity* que empiezan en épocas de crisis suelen ser tener mejores resultados comparadas con los de otras. Hace poco más de diez años los fondos de *private equity* empezaron a participar tímidamente en los procesos de compra y venta de empresas en Perú hasta haberse vuelto actores protagónicos. Esperemos que el protagonismo continúe y exista más capital invertido en el Perú.

Además de ello, es importante tener en cuenta que hay otros factores que hacen que los empresarios busquen inversión en *private equity* y no préstamos bancarios. Esto se da básicamente por tres razones. En primer lugar, porque una empresa de *private equity* asume el riesgo con el otro accionista, es decir, al ser también parte del capital de la compañía, tendrá que hacer sus mejores esfuerzos para que la empresa crezca y, si los resultados no son los mejores, estas pérdidas se dividen entre ambos; en el mundo del *private equity* se está menos expuesto a la inestabilidad de los mercados públicos a corto plazo, lo cual permite al gestor centrarse en la gestión de las empresas e impulsar la creación de valor. En segundo lugar, los intereses bancarios están más altos que nunca y esto genera un costo financiero que muchas veces los empresarios no quieren asumir. Además, se está volviendo cada vez más difícil ser sujeto de crédito bancario sobre todo por la realidad en la que estamos transitando: Niño Costero y probablemente un Niño Global que afectaría a diversos sectores como pesca y agricultura. Finalmente, la volatilidad de los mercados de renta variable ha generado que muchas empresas ya no busquen salir al mercado de valores; desde finales del año 2021 la salida en bolsa de las empresas ha disminuido en un 45%.

La forma como se negocia una transacción de compraventa de un fondo de *private equity* suele tener algunas particularidades en el contrato de compraventa de acciones: se hará principal énfasis en las cláusulas de salida del fondo de la empresa para que sus acciones se vendan en un plazo de tiempo que está delimitado, además se firmará un convenio de accionistas en el que las partes buscarán negociar cláusulas de *drag along* y *tag along* en una posterior venta.))

El famoso *private equity* se ha convertido en una forma muy utilizada de captación de capital en los últimos años. Consiste en aportar recursos financieros a una empresa que generalmente no cotiza en bolsa. Esta inversión se hace por un periodo y, a cambio, el inversionista recibirá una participación accionaria en la empresa.



ALEJANDRA SANTISTEVAN DE LAS CASAS
Asociada senior, especialista de derecho corporativo
Senior associate, specialist in corporate law
asantistevan@munizlaw.com

Opportunities for private equity or risk capital in times of crisis

There is an investment concept we should teach entrepreneurs and businessmen in general so that their businesses grow at a faster and more professional rate. The famous private equity has become a widely used method of equity raising in recent years. It consists of providing financial resources to a company that usually does not have its shares listed in the stock market. This investment is done for a period of time and, in exchange, the investor will receive a shareholding interest in the company. After some time, these shares will be sold to a third party for a much higher price than they were initially purchased; thus, the invested capital is recovered.

This type of financial investment is an attractive profitability for investors and can be applied in the different phases of a company: from the initial phase in which it represents a higher risk, to the phases where the company is already considered "mature". Also, for entrepreneurs deciding to accept this type of financing, letting go the whole or part of their shares in the company they have incorporated is a possibility for a faster growth of their business and for higher profitability in the short-term.

Once the share capital of a company enters in an investment fund, the fund will have the purpose of making companies be more professional, grow and be stronger so that they become more profitable. As part of the company, both the founders and the fund will discover new ways to create value for the benefit of the investors and the company. The success of a private equity investment will depend on a quick strategy to boost the growth of the business at a higher rate.

This type of investment usually has a nice pace, even in periods of crisis, as good opportunities can be found in buying businesses in which shareholders have an urgent need for investment. This is how the profitability of private equity funds beginning in times of crisis usually have better results compared to others'. Almost 10 years ago, private equity funds slowly began participating in the company sale and purchase processes until they became leaders. Let us hope this leadership continues and more capital is invested in Peru.

Furthermore, it is important to consider the existence of other factors that lead entrepreneurs towards private equity investments instead of bank loans. This basically

occurs for three reasons. First, because a private equity company undertakes the risk along with the other shareholder, i.e., they will have to do their best to make the company grow and, if results are not the best, the losses are divided between both of them. In the world of private equity, exposure to short-term public market instability is lower and this allows the manager to focus on company management and promote value creation. Second, bank interests are higher than ever, thus generating financial costs entrepreneurs usually do not want to undertake. Furthermore, it has become more difficult to become eligible for credit, especially because of the circumstances we are going through: The Niño Costero and a possible Niño Global that would affect different sectors such as fishing and agriculture. Finally, the volatility of equity markets has caused many companies to stop going public. Since late 2021, the number of companies going public has decreased by 45%.

The way a sale and purchase transaction of a private equity fund is negotiated usually has some peculiarities in share trading contracts: emphasis will be in the opt-out clause of the company, so that its stocks sell within a certain time frame; additionally, a shareholder agreement will be signed where all Parties will try to negotiate drag along and tag along clauses on a subsequent sale.)))

IP Stars 2023 y OMPI

Nuestro socio senior Piero Calderón, codirector del área de Propiedad Intelectual y director del Departamento de Marcas, fue reconocido como IP Stars 2023 del mercado legal peruano; mientras que Johana Calderón y Juliana del Águila, asociada senior y asociada de la misma área, destacaron como *change makers* en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Our senior partner, Piero Calderón, co-director of the Intellectual Property area and director of the Brand Department, was acknowledged as IP Stars 2023 in the Peruvian legal market, while Johana Calderón and Juliana del Águila, senior associate and associate for the same area, respectively, were distinguished as "change makers" in the World Intellectual Property Organization (WIPO).



Leaders League 2023

Fuimos considerados por la guía legal Leaders League 2023 como una de las firmas legales peruanas más destacadas en las especialidades de Fashion Law, Patent litigation, Enforcement & anti-counterfeiting actions, Patent prosecution, Trademark prosecution, IP litigation, Regulatory law for health, pharma, and medical devices y Plant varieties protection.

We were considered by the legal guide Leaders League 2023 as one of the Peruvian legal firms that excels in the specialties of Fashion Law, Patent litigation, Enforcement & anti-counterfeiting actions, Patent prosecution, Trademark prosecution, IP litigation, Regulatory law for health, pharma and medical devices and Plant varieties protection.





Aniversario Estudio Muñiz

El Estudio Muñiz cumplió 42 años de fundación, tiempo en el que hemos alcanzado los más altos estándares de calidad, ofreciendo un servicio personalizado e innovador.)))

Estudio Muñiz turned 42 years of creation; throughout this time, we have met the highest quality standards, offering a customized and innovative service.)))

Deal of the Quarter (2Q-2023)

La prestigiosa publicación especializada en el monitoreo de operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones), TTR - Transactional Track Record (TTRRecord.com), catalogó como Deal of the Quarter (2Q-2023) la operación en la que asesoramos a Oben Holding Group en la adquisición de la planta de producción de KristaFilms, perteneciente al Grupo Agusa de México.)))

The prestigious report specialized in M&A (Mergers & Acquisitions) operations monitoring, TTR - Transactional Track Record (TTRRecord.com), categorized the operation in which we provided counseling to Oben Holding Group for the purchase of KristaFilms (which belongs to Grupo Agusa - Agusa Group - from Mexico) production plant as Deal of the Quarter (2Q-2023).)))



Doing Business In...2023

Nuestros socios y abogados Mauricio Olaya, José Ballón, César Puntriano, Jorge Otoyá, Juan Carlos Vélez, Ricardo de la Piedra y Diego Muñiz participaron en la edición 2023 de Doing Business In... de Chambers & Partners, en la que detallaron los aspectos legales para invertir en Perú, los mecanismos de control sobre las fusiones y adquisiciones, entre otros temas.)))

Our partners and attorneys Mauricio Olaya, José Ballón, César Puntriano, Jorge Otoyá, Juan Carlos Vélez, Ricardo de la Piedra and Diego Muñiz took part of the 2023 edition of Doing Business In... by Chambers & Partners, where they explained the legal aspects for investing in Peru, the control mechanisms over mergers & acquisitions, among other topics.)))



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú

T (51-1) 611-7000



www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑOZ

MUÑOZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chíncha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca